



CARMEN FUENTES MILLÁN
PROCURADORA

N/Ref. 17928

Cliente... : AYUNTAMIENTO DE HOSPITALET DE LLOBREGAT
Contrario : DPTO. DE ENSENYAMENT DE GENERALITAT
Asunto... : REC.CONTENCIOSO-ADMON (ORDINARIO) 476/14-C
Juzgado.. : TSJC,CONTENCIOSO-ADM SEC5 BARCELONA

COMUNICACIÓN

NOTIFICACION

28.11.2017

SENTENCIA

17-11-2017 FALLA:

- 1.-ESTIMA PARCIALMENTE NTRO. Rº CONT-ADM.**
- 2.-RECONOCE NTRO. DERECHO A PERCIBIR PAGO.**
- 3.-RECHAZA LAS DEMÁS PRETENSIONES.**
- 4.-SIN COSTAS.**

Términos

16.01.2018

FINE, EN SU CASO, PREPARACIÓN Rº DE CASACIÓN

Saludos Cordiales

**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA**

Recurso nº 476/2014

SENTENCIA Nº 849/2017

Ilmos. Sres.:

Presidente:

DON ALBERTO ANDRÉS PEREIRA

Magistrados:

DON JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS

DON FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVAS

DOÑA ANA RUBIRA MORENO

DON EDUARDO PARICIO RALLO

En la ciudad de Barcelona, a diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA), ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo número 476/2014, interpuesto por el **AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT**, representado por la Procuradora DON CARMEN FUENTES MILLÁN y dirigido por la Letrada DON ISABEL ALONSO HIGUERA, **contra la GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT**, representada y dirigida por el Señor LETRADO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Ha sido Ponente la Magistrada Doña Ana Rubira Moreno, quien expresa el parecer de la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La representación de la parte actora, por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, interpuso recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta del requerimiento previo formalizado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.1 de la LJCA, por el que se reclamaba el pago de diversas subvenciones, otorgadas y no pagadas, relacionadas con el funcionamiento de las guarderías municipales.

Posteriormente, el recurso se vio ampliado a la resolución dictada el 15 de abril de 2015 por la Consellera d'Ensenyament, que desestima ese requerimiento previo.

SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto en la Ley reguladora de esta Jurisdicción.

La actora dedujo demanda en la que, tras relacionar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba solicitando que se dictara sentencia condenando a la Administración demandada al pago de intereses de demora en relación a las cantidades de 91.200 euros (curso 2010-2011) y 747.000 (curso 2011-2012), y a cumplir su obligación legal de subvencionar anualmente el sostenimiento de plazas de guardería municipales, bien a través de la formalización de convenios de colaboración, por la adopción de acuerdo de financiación o convocatoria de subvenciones o a través de cualquier otro instrumento, para los cursos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015, descontando los pagos realizados por la Diputación de Barcelona, más los correspondientes intereses.

Opuesta por la Administración demandada la desviación procesal en la que había incurrido la actora, la misma en el escrito de conclusiones modificó su petitum, solicitando que se condenara a la Administración demandada a cumplir su obligación legal de subvencionar anualmente el sostenimiento de plazas de las guarderías municipales, bien a través de la formalización de los correspondientes convenios de colaboración, por la adopción de un acuerdo de financiación y convocatoria de subvenciones o a través de cualquier otro instrumento para los cursos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015, todo ello con carácter retroactivo, descontando los pagos realizados por la Diputación de Barcelona e ingresados en el Ayuntamiento, más los intereses de demora, desapareciendo al pretensión de pago de los intereses de las cantidades satisfechas correspondientes a los cursos 2010-2011 y 2011-2012.

La Administración demandada en la contestación a la demanda solicitó inadmisibilidad del recurso en cuanto a la pretensión de pago de intereses y su desestimación en cuanto a las demás pretensiones.

TERCERO.- Se prosiguió el trámite correspondiente y, practicadas las pruebas que propuestas fueron declaradas pertinentes, con el resultado que obra en las actuaciones, se pasó al trámite de conclusiones sucintas, señalándose para votación y fallo el 16 de noviembre de 2017.

CUARTO.- En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la desestimación inicialmente presunta y después expresa mediante resolución dictada el 15 de abril de 2015 por la Consellera d'Ensenyament, del requerimiento previo formalizado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.1 de la LJCA.

En ese requerimiento previo se denunciaba la inactividad del Departament d'Ensenyament por la falta de concreción de la colaboración en la financiación de los centros del primer ciclo de educación infantil de titularidad municipal, en relación

a los cursos que no tiene determinada la forma de colaboración en su mantenimiento y en el mismo se pedía la adopción de un acuerdo de financiación y convocatoria de subvención de los citados centros para los cursos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015 en cumplimiento de su obligación legal de subvencionar de forma ininterrumpida, el sostenimiento de plazas para niños de 0 a 3 años en los centros de titularidad municipal.

La parte actora deduce la obligación de la Administración demandada de financiar los centros de educación infantil, primer ciclo, de lo establecido en el artículo 131.3.f) del Estatuto de Autonomía, que establece la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de educación infantil, desarrollada en la Ley 5/2004, de 9 de julio de Creación de Guarderías, cuyo artículo 2 establece la obligación del Gobierno de garantizar el mantenimiento de las plazas de guarderías públicas, y en los artículos 198.2 y 205.2 y Disposición adicional 22 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Catalunya.

La Administración demandada opone que el artículo 84 del Estatuto de Autonomía atribuye esa competencia a los municipios, sin que los artículos 25 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de LBRL, que atribuye la misma a las Comunidades Autónomas puedan tener el carácter de básica para Cataluña al no encontrar amparo en el artículo 149.1.18 de la CE. El artículo 198.2 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Catalunya, establece una obligación genérica de financiación de las guarderías municipales, sin fijar periodicidad ni cuantía al tratarse de una competencia municipal y porque ese tipo de educación no es obligatoria, dejando un margen de decisión a la Generalitat a la hora de decidir la contribución a la financiación de un servicios de los Ayuntamientos y porque su artículo 42 no establece obligación concreta de firmar convenios para la financiación de guarderías.

SEGUNDO.- Obran en el expediente administrativo los siguientes datos de interés para la resolución del recurso: acuerdo marco entre la Administración de la Generalitat de Catalunya el Departament d'Educació, la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació Catalana de Minicipis i Comarques, de fecha 19 de noviembre de 2010, relativo a la financiación del sostenimiento de las plazas públicas de educación infantil, primer ciclo, de titularidad de las Corporaciones locales, cuya cláusula primera indica que el Departament d'Educació contribuirá en la financiación de los gastos corrientes ocasionados en el funcionamiento de centros de educación infantil titularidad de las Corporaciones locales, fijando en la siguiente el importe para el curso 2010-2011 en 1.800 euros por alumno; los convenios suscritos por la actora y la demandada los días 16 y 23 de abril de 2013, para el sostenimiento de los centros educativos de primer ciclo de educación infantil de titularidad de la actora para los cursos 2011-2012 y 2010-2011; anuncio de la aprobación del programa complementario de la Diputación de Barcelona de la financiación de centros de educación infantil, primer ciclo, 2012-2013 y 2013-2014.

Con la demanda se acompaña copia de otro convenio de colaboración, de fecha 16 de noviembre de 2011, para el sostenimiento de los centros educativos de primer ciclo de educación infantil de titularidad de la actora para el curso 2010-2011. También copia de diversos convenios firmados por la Administración demandada y

la Administración actora que tenían por objeto la creación de sendos centros escolares públicos de titularidad municipal para la educación infantil de primer grado.

En los convenios citados, tras mención del artículo 198.2 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, se indica que en atención a las disponibilidades presupuestarias del Departament d'Ensenyament, se fija el importe de la subvención en 1.300 euros por alumno y curso en el primero y 1.600 euros también por año y curso en los otros dos.

TERCERO.- La cuestión litigiosa aquí planteada ha sido tratada y resuelta en la sentencia número 844/2017, de fecha 17 de noviembre, dictada en el recurso 448/2014 tramitado en esta Sala y Sección.

En su fundamento de derecho segundo y siguientes se recoge:

"SEGON.- Així doncs, el nucli d'aquest recurs consisteix en determinar en quina mida la Generalitat de Catalunya queda obligada a finançar el servei d'educació infantil, primer cicle de 0 a 3 anys, específicament el servei prestat per l'Ajuntament recurrent mitjançant les llars d'infants que gestiona.

L'article 131 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'ensenyament infantil en els aspectes que es relacionen a l'apartat 2/, i específicament la competència sobre el règim de sosteniment amb fons públics dels ensenyaments del sistema educatiu i dels centres que els imparteixen.

En aquest sentit, la Generalitat assumeix la condició d'administració educativa i li correspon la responsabilitat general d'execució en aquesta matèria, responsabilitat que inclou el seu finançament -article 155 de la Llei orgànica 2/2006, d'educació-, especialment en allò que afecta els centres públics -article 112 de la mateixa Llei-.

Els municipis per al seva banda han assumit tradicionalment un posició relativament tangencial en matèria d'ensenyament, al menys en allò que es referix a la titularitat de competències pròpies. La legislació ha limitat històricament aquest paper a la posta a disposició dels solars per a la construcció i el manteniment dels centres d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial (disposició addicional 15 de la Llei orgànica 2/06), sense perjudici de l'assumpció d'altres funcions o serveis en col·laboració amb l'administració educativa, molts cops de suplència. En aquest sentit, i en allò que ací interessa, l'article 27 de la Llei 7/85 de bases del règim local preveu la possibilitat que les comunitats autònomes puguin delegar les seves competències en determinades matèries, entre les mateixes, la relativa a la creació, manteniment i gestió de les escoles infantils d'educació de titularitat pública de primer cicle d'educació infantil, com és el present cas.

La fixació precisa del sistema competencial dels municipis queda reenviat per la legislació bàsica a la normativa sectorial. En allò que es refereix a l'ensenyament infantil és el mateix Estatut d'autonomia que atribueix als governs locals la competència sobre la planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil com a competència pròpia. La legislació ordinària no ha arribat a concretar a quin nivell de

l'administració local pertoca exactament aquesta competència. Tanmateix es pot deduir inicialment que, d'acord amb els criteris establerts a l'article 66.4 de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, aquesta competència ha de correspondre als Ajuntaments, si mes no els que disposen de capacitat de gestió suficient, com és el cas.

El cas és que la titularitat de la competència no exclou que les administracions superiors, específicament la Generalitat de Catalunya, quedin deslliurades de tota responsabilitat financera.

En efecte, un dels principis que informa el règim local és el de suficiència financera, principi que queda ancorat a la mateixa Constitució espanyola -article 142- i a l'Estatut d'Autonomia -articles 217 i 219-. En aquest sentit, l'ordenament garanteix a les administracions locals la disponibilitat de recursos suficients, be a partir de dels recursos tributaris, o be a partir de transferències de els administracions superiors, concretament mitjançant la participació en els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, i també a partir de les subvencions provinents d'un i altre nivell de govern -articles 2, 39 i 40 de la Llei d'Hisendes locals, Reial Decret legislatiu 2/04-.

El principi de suficiència financera es projecta en tota l'activitat municipal sigui en relació a les competències pròpies o delegades. En aquesta direcció cal esmentar particularment l'article 219 de l'Estatut d'autonomia, precepte que garanteix als governs locals la disponibilitat dels recursos suficients per a afrontar la prestació dels serveis la titularitat o la gestió dels quals se'ls traspassi o se'ls delegui, afegint que tota nova atribució de competències ha d'anar acompanyada de l'assignació dels recursos suplementaris necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es tingui en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats. Fins i tot s'estableix que el compliment d'aquest principi és una condició necessària perquè entri en vigor la transferència o la delegació de la competència.

La legislació bàsica és així mateix prou explícita en aquest sentit. Així, en l'àmbit de les competències pròpies, l'article 25 de la Llei 7/85 determina que la Llei que atribueixi la competència ha de preveure necessàriament la dotació dels recursos necessaris per a garantir la suficiència financera de les entitats locals, de forma que s'eviti una major despesa a les Administracions.

Pel que fa a les competències delegades, l'article 27 de la mateixa Llei de bases del règim local disposa en el mateix sentit que la resolució de delegació haurà de determinar els medis personals, materials i econòmics que l'Administració delegant atribueixi, sense que pugui suposar una major despesa per a les Administracions.

Per tant, el plantejament de la normativa general és ben clara en garantir que l'atribució de competències a les Administracions locals imposa indefugiblement l'atribució dels recursos corresponents. En conseqüència es indiferent que en el cas de l'educació infantil estiguem davant una competència delegada en els termes de la Llei de bases del règim local, o bé una competència atribuïda com a pròpia per l'Estatut d'Autonomia. El cas és que la Generalitat va anar convenint amb l'Ajuntament recurrent la creació de successives llars d'infants i la correlativa assumpció de la competència de gestió, situació que comporta la necessitat de

transferir els recursos econòmics corresponents en els termes de la normativa esmentada.

La legislació d'ensenyament reitera l'anterior plantejament. En efecte, l'article 1 de la Llei 5/2004, de creació de llars d'infants de qualitat, incorpora les llars d'infants municipals a la xarxa de titularitat pública i el article 4 les considera part del sistema educatiu, circumstància que comporta la responsabilitat financera de l'administració educativa segons allò que disposen l'article 112 de la Llei orgànica 2/2006 i l'article 204 de la Llei 12/09 d'educació. La mateixa disposició final primera de la Llei 5/04 imposa al Govern la responsabilitat de dotar les partides pressupostàries necessàries en els pressupostos de la Generalitat a aquests efectes.

En el mateix sentit es manifesta la Llei 12/2009, d'educació. Així, l'article 42.3 determina que el sosteniment dels centres públics ha de quedar establert als pressupostos de la Generalitat amb un criteri de suficiència, criteri que han de seguir també els convenis que l'Administració educativa subscrigui amb l'Administració local. Mes concretament, l'article 198.1 disposa que el Departament ha d'establir una oferta de places per a infants de zero a tres anys, i l'apartat 2/ preveu específicament que el mateix Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars d'infants de titularitat municipal, sense perjudici que doni preferència a les necessitats d'escolarització d'infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals.

I, així, el Departament va actuar coherentment amb l'anterior mandat en establir els corresponents convenis i subvencions amb l'ajuntament recurrent des de l'any 1997, convenis en els que hom reconeix que el seu objectiu era el de complir el mandat de l'article 198.2 de la Llei 12/09 i que la subvenció atorgada estava destinada a minorar les quotes del servei d'ensenyament de les llars d'infants de titularitat municipal per al curs corresponent.

En definitiva, cal concloure que la Generalitat de Catalunya manté una responsabilitat financera respecte les llars d'infants gestionades per l'Ajuntament recurrent, responsabilitat que en el seu moment va canalitzar mitjançant els convenis i subvencions concedides anualment i que sobtadament va deixar d'assumir a partir del curs 2012-13, amb infracció de l'ordenament".

TERCER.- (...).Per tant, cal descartar les al·legacions de la demandada en el sentit que el servei estaria atès a partir de es subvencions de la Diputació de Barcelona o del preu públic abonat pels usuaris. Certament, la Diputació de Barcelona va aportar uns ajuts durant els exercicis en els que la Generalitat va deixar de finançar el servei, però no hi ha base per considerar que aquests ajuts provincials es fessin per compte i en substitució de la Generalitat de Catalunya. Cal considerar en aquest sentit que la Diputació va actuar en compliment d'una competència pròpia de cooperació amb els Ajuntaments d'acord amb allò que disposa l'article 36 de la Llei 7/85, de bases del règim local-, de forma que els recursos econòmics que la Diputació aporta als municipis son recursos propis del sistema local i el seu sentit és el de ajudar als Ajuntaments a suportar la seva càrrega financera, no la de la Generalitat que te una responsabilitat pròpia i autònoma pel que fa al finançament municipal.

En definitiva, l'Ajuntament va haver de suportar mes de la meitat del cost del servei.

Hom reclama en aquest sentit que es reconegui al municipi el dret a percebre la quantitat de 1.800 euros per alumne i curs, que és la subvenció que la demandada va atribuir al curs 2009-10, encara que els següents cursos es va reduir la subvenció a 1.600 euros el curs 2010-11, i a 1.300 euros el curs 2011-12.

En allò que es refereix a la determinació de la concreta quantitat que ha de ser objecte de finançament, la normativa esmentada al fonament anterior es refereix en general a la suficiència de les aportacions en funció dels costos. L'article 42.3 de la Llei 12/09 s'expressa també en aquesta línia, i l'article 204.2 d'aquesta mateixa Llei determina en aquest sentit que cal prendre com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat, establint la disposició addicional quarta la necessitat de revisar periòdicament les aportacions d'acord amb l'evolució dels costos.

No és menys cert que, dins els límits que imposa el principi de suficiència, cal admetre un marge de la Generalitat de Catalunya per determinar la intensitat del finançament d'aquest servei en el marc de la política pressupostària. D'altra banda, no consta en aquest cas quins son els costos de les llars d'infants de la Generalitat de Catalunya que caldria prendre com a paràmetre de referència segons que s'ha esmentat.

En aquest context, s'estima procedent estar al finançament establert al darrer conveni, això és, a la quantitat d e 1.300 euros per alumne equivalent i curs, quantitat que en el seu moment va ser acceptada per l'Ajuntament, sense que s'hagi acreditat una variació de costos significativa des del curs 2010-11 que pugui justificar la necessitat de revisar l'anterior mòdul.

Pel que fa als interessos, cal admetre la seva procedència des de la seva reclamació en allò que es refereix al curs 2011-12 respecte el qual el finançament estava quantificat ja al conveni. No correspon en canvi reconèixer el dret als interessos en allò que es refereix als cursos següents atès que la quantitat del deute no ha estat líquida fins aquesta mateixa sentència.

No es considera procedent la condemna a l'Administració a signar els corresponents convenis doncs, independentment que aquesta sigui la tècnica de relació a la que es remet la normativa sectorial als efectes d'establir el sosteniment dels centres docents, l'obligació que ací es reclama es limita al finançament del servei; obligació aquesta que no necessita canalitzar-se necessàriament mitjançant conveni. D'altra banda, poc sentit tindria la subscripció de convenis un cop finalitzats els cursos corresponents".

El principio de unidad de doctrina ha de llevar a la asunción de dichos pronunciamiento y a resolver en atención al contenido del suplico de la demanda, en el que se pide que se condene a la Administración demandada a cumplir su obligación legal de subvencionar el sostenimiento de plazas de las guarderías municipales los cursos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015, descontando los pagos realizados por la Diputación de Barcelona e ingresados en el Ayuntamiento. En esta resolución no cabe reconocer efecto alguno a la Orden ENS/3009/2012, de 5 de

octubre, que se cita en la demanda, que aprueba un programa de subvenciones pero dirigido a centros educativos privados, ni al Plan único de obras y servicios de Cataluña por su alegación extemporánea en el escrito de conclusiones de la actora.

Procede, pues, estimar parcialmente el recurso para anular la resolución recurrida y reconocer el derecho de la Administración recurrente a percibir de la Administración demandada al pago de 1.300 euros por alumno de las Llars d'Infants en los cursos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015, descontando los pagos efectuados en esos cursos por la Diputación Provincial de Barcelona, rechazando su pretensión de pago los intereses correspondientes a los mismos.

CUARTO.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, estimado parcialmente el recurso no procede hacer expresa condena en costas.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, ha decidido:

PRIMERO. Estimar parcialmente el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat contra la desestimación inicialmente presunta y después expresa mediante resolución dictada el 15 de abril de 2015 por la Consellera d'Ensenyament, del requerimiento previo formalizado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.1 de la LJCA, y anular la resolución recurrida.

SEGUNDO. Reconocer el derecho de la Administración recurrente a percibir de la Administración demandada al pago de 1.300 euros por alumno de las Llars d'Infants en los cursos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015, descontando los pagos efectuados en los mismos por la Diputación Provincial de Barcelona.

TERCERO. Rechazar las demás pretensiones.

CUARTO. Sin expresa condena en costas.

Contra esta sentencia cabe, en su caso, recurso de casación, que se deberá preparar ante esta Sección en el plazo de 30 días desde su notificación, con arreglo al artículo 89.1 LJCA en la redacción conferida por la L.O. 7/2015, en relación con lo previsto en el artículo 86 y siguientes LJCA.

Así por esta nuestra sentencia, que será notificada a las partes, llevándose testimonio de la misma a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Magistrado Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.



Mensaje LexNET - Notificación

Mensaje

IdLexNet	201710179929198	
Asunto	SENTÈNCIA SECCIÓ Recurs ordinari (Llei 1998)	
Remitente	Órgano	T.S.J.CATALUÑA CON/AD SEC.5 de Barcelona, Barcelona [0801933005]
	Tipo de órgano	T.S.J. SALA DE LO CONTENCIOSO
Destinatarios	FUENTES MILLAN, CARMEN [431]	
	Colegio de Procuradores	II-lustre Col·legi dels Procuradors de Barcelona
Fecha-hora envío	27/11/2017 10:59	
Documentos	03994_20171124_1532_0016509995_01.rtf(Principal) Hash del Documento: 5d67d6ca9599d38ef3a2c8140eb634b7f6e6ebec	
Datos del mensaje	Procedimiento destino	FIC Nº 0000476/2014
	Detalle de acontecimiento	SENTÈNCIA SECCIÓ

Historia del mensaje

Fecha-hora	Emisor de acción	Acción	Destinatario de acción
27/11/2017 16:01	FUENTES MILLAN, CARMEN [431]-II-lustre Col·legi dels Procuradors de Barcelona	LO RECOGE	
27/11/2017 11:00	II-lustre Col·legi dels Procuradors de Barcelona (Barcelona)	LO REPARTE A	FUENTES MILLAN, CARMEN [431]-II-lustre Col·legi dels Procuradors de Barcelona

(*) Todas las horas referidas por LexNET son de ámbito Peninsular.